



**INTERVENCIÓN DE ISABEL DÍAZ AYUSO,  
PRESIDENTA DE LA COMUNIDAD DE MADRID,  
EN EL FORO DE EXPANSIÓN Y EL MUNDO**

Madrid, 16 de enero de 2023

Señoras y señores, queridos amigos:

Vengo a esta conferencia con honda preocupación por lo que está ocurriendo en España.

Se resume en que el sanchismo está ocupando todo espacio político, institucional y social de manera totalitaria e ilegítima. Lo hacen con clara intención de cambiar el orden constitucional por la puerta de atrás, despreciar, generar dependencia de las arcas públicas en el mayor número de españoles posible, y hacer imposible la alternancia en el poder.

Sánchez no tiene más programa que la mentira, ni más política que dejar a la sociedad española indefensa, anestesiada y sin recursos.

El poder ejecutivo, el poder legislativo, el poder judicial, la opinión pública, los medios de comunicación y los organismos públicos y semi públicos están siendo colonizados por la ultraizquierda, por grupos que llevan años proclamando su intención de acabar con la Nación española.

Y esto, aunque algunos puedan creer que afecta sólo a la esfera política o que se trata de meras cuestiones jurídicas, todo esto al final va minando las instituciones, la convivencia, la prosperidad y, como ha ocurrido en todo el mundo, acaba dejando sin libertad, sin riqueza, y sin país a todos y cada uno de los españoles.

Ahora bien: lo único que no pueden ocupar el sanchismo y sus socios son las urnas, y es ahí donde tenemos que ganar. Desde luego, yo voy a dar la batalla.

Y de esto quiero hablar esta mañana.



Señoras y señores:

Todo lo que estamos viendo en la España del sanchismo obedece a un plan: no es improvisación. Llevo tiempo avisando: lo he llamado «la estrategia de la carcoma»: ir ocupando y minando las instituciones, hasta que un día, cuando de un solo golpe, se desmoronen.

Pedro Sánchez tiene un proyecto que pasa por anular todo lo que defiende a los ciudadanos de los abusos y de la arbitrariedad del poder.

Su plan consiste en que él sea el presidente del gobierno, el jefe de los jueces, la mano que maneja cada empresa estatal, el director y el dueño de los medios de comunicación, quien decida lo que los jóvenes estudian y lo que se les oculta, el que mande sobre los consejos de administración de las empresas, quien ponga el pan sobre la mesa de cada familia, quien deje endeudadas a las generaciones futuras que aún ni votan, y quien no acepta la crítica ni el papel de la oposición.

Si una gran empresa o un pequeño comercio, se opone a lo que hace, simplemente lo asfixiará; por eso muchas de sus medidas van contra la empresa más libre y, a la vez la más vulnerable: la pequeña y mediana empresa, la familiar, los autónomos.

Y, ahora, cree tener asegurado que el Tribunal Constitucional diga que cualquier cosa que haga Sánchez está ajustada a derecho. Es el mundo al revés.

Pregunten a su secretaria de Estado de Igualdad, que se ríe descaradamente de las mujeres violadas en la grabación de un vídeo, y que Sánchez, su gobierno, sus aliados, sus votantes, sus activistas en los medios de comunicación dijeron que era un bulo.

Ni siquiera un vídeo les convenció de su indignidad.

Vamos camino de que en España no haya Estado de derecho: existirá la arbitrariedad del poder revestida de votos comprados con la libertad y el futuro de todos los españoles, llegados a La Moncloa por una moción de censura basada en acusaciones falsas.

Es lo mismo que estamos viendo en el continente americano a manos del populismo. O, trasladado a la historia de España, ya lo sufrimos en la antesala que provocó la peor catástrofe de nuestra historia: la deriva totalitaria de la Segunda república, que desembocó en la discordia y en la Guerra Civil.

Sánchez, que ansía ser recordado por algún hecho histórico, ha declarado su admiración por ese periodo, y ese es el objetivo de todo su plan cada vez menos oculto: terminar con la España de la Transición y llevarnos a una república federal, laica y plurinacional, al dictado de quienes odian a la primera.

Con esta maniobra de anular las estructuras sociales, a los jueces, las leyes, el Código Penal, a la oposición y a la prensa libre, nos dejará sin modo de defendernos.

Quiero que se entienda esto: los ciudadanos no podrán defenderse del poder. Las instituciones, las leyes, la prensa, la fiscalidad, la Constitución existen para beneficio del ciudadano, y, sobre todo, de los ciudadanos más vulnerables.

Cuando todo eso salte, cuando no haya límites al poder, ni controles, la gente quedará a merced de los que, como Sánchez, viven abusando sin vergüenza de los medios públicos, recaudando impuestos confiscatorios y arbitrarios, endeudando a varias generaciones, mientras, como los populistas de la izquierda hispanoamericana, fabrica pobreza con la que perpetuarse en el poder. Y sin realizar un solo esfuerzo para ese ahorro: 22 ministerios y lo que hay detrás.

Mucha izquierda hoy defiende este plan porque dicen que tienen los votos del Congreso, aunque sean votos que llegan de quienes odian a España o de los que estuvieron con el terrorismo de Eta.

Pero, cuando todo se desmorone, cuando no haya defensa del ciudadano y todos dependan del poder, cuando el poder decida que tampoco admite crítica de estos de izquierda que hoy lo aplauden, ya no habrá nadie para defenderlos.

Lo último que tenemos que soportar es que nos quieren convencer de que la subida de precios por la inflación se debe a que los supermercados se forran, y no el gobierno, según la líder de esa nueva izquierda que no sabemos a quién quiere sumar ni para qué quiere sumar.



Sánchez se basa en que tiene votos en el Congreso de los Diputados para acometer este plan, pero realmente sus votos no son para eso: como bien repite el presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, que lo recuerda: esto ni lo anunció en su programa electoral ni tiene derecho a dinamitar el sistema.

No tiene mandato para cambiar el régimen: su plan es ilegítimo; es un fraude de ley de libro: quiere cambiar el orden constitucional sin convocar los procedimientos constituyentes, y habiendo mentido sobre todas y cada una de sus intenciones.

El resultado es que Sánchez gobierna una España contra otra, que es exactamente lo contrario al espíritu de la Transición, basado en el consenso. La Transición consistió en la devolución de España a los españoles; Sánchez y sus socios nos la están arrebatando con nocturnidad.

Sánchez tiene el plan de someter a la Justicia, como ha hecho con la Fiscalía y el Tribunal Constitucional; censurar a la Prensa, con ataques personales a periodistas y comunicadores; destruir a la Oposición con quien no debate las leyes porque lo hace todo por decreto. No hay institución ni empresa pública sin un amigo de Sánchez al frente.

El plan final es que el ciudadano no tenga modo de defenderse del poder y que toda protesta sea, silenciada o desacreditada, o comprada.

Todo esto lo hemos visto ya en Hispanoamérica: está trasladando el mismo plan. Es el mismo modelo.

Para ello se apoya en los que declaran, abiertamente, que son enemigos de España.

Es decir: Sánchez actúa contra la Nación.

Dijo Su Majestad el Rey el pasado 24 de diciembre: necesitamos fortalecer nuestras Instituciones. Unas Instituciones sólidas que protejan a los ciudadanos.

Insisto: unas instituciones sólidas que protejan a los ciudadanos.

Señoras y señores:

Cuando se desarma nuestro sistema constitucional y el Código Penal; cuando se permite la sedición, el incumplimiento de las órdenes de la enseñanza en español, cuando



se ponen en la calle a los terroristas de Eta, que han sido juzgados y condenados en Democracia; y se beneficia a violadores y a corruptos, las instituciones democráticas quedan destrozadas y no se protege a los ciudadanos. La sociedad queda indefensa.

Esta es la situación angustiosa en la que nos encontramos.

A cambio, Sánchez propone pagar 5 euros al mes a los integrantes de familias vulnerables para pretender comprar su silencio, más miles de millones a gobernantes, financieros y medios de comunicación para que no lo denuncien.

Ustedes, Expansión y El Mundo, Unidad Editorial, son muy valientes por dejarme expresar aquí esta denuncia: no duden que lo van a pagar caro. Como yo.

Analicemos la personalidad de Sánchez, descrita por sus amigos:

Quim Torra, uno de los más beneficiados por Sánchez, contó este pasaje en una entrevista. Tomo estas palabras de una grabación pública. Cito:

El presidente Sánchez de verdad es un presidente que quiere ser presidente y que no tiene ningún problema en aliarse con quien sea para cambiar las políticas que sean, hacer que aparezca una mesa de negociación por aquí, una reforma de sedición por allá. Es igual para poder continuar siendo presidente.

Eso lo ha dicho Quim Torra.

En un mitin, el mismo Pedro Sánchez contó su diálogo con Pablo Iglesias cuando era el líder de la ultraizquierda. Narró lo siguiente:

Dice Sánchez:

-Yo hablaba con Pablo Iglesias; bueno, las pocas veces que he podido hablar con él. Era cuestión de minutos, pero pregunté: Oye, Pablo, ¿qué te parece si recuperamos los convenios colectivos?

Responde Iglesias:

-Bueno, eso me parece fundamental, pero yo creo que es mucho más importante controlar a los jueces y a los fiscales ¿no?



-Bueno, -preguntaba Sánchez- y ¿qué te parece si reconocemos las becas como un derecho o defendemos a los autónomos?

-Bueno, -replicaba Iglesias- es fundamental pero antes tendremos que controlar RTVE: mira, en política el orden de los factores sí altera el producto.

¿Cuál es el problema?, decía Sánchez: que antes de recuperar esos derechos siempre van a anteponer otras cosas como es el control de los jueces, de los policías, de los fiscales, de los espías y el derecho de la autodeterminación de Cataluña, Galicia y del País vasco.

Así se expresaba el actual presidente del gobierno antes de convertirse en cabecilla de podemita y en apoderado de sediciosos. Antes de hacer lo que el otro le pidió.

Pregunto: ¿qué se puede esperar de quien es descrito así por sus socios y de quien ha traicionado tanto sus propias palabras?

Lo peor: estamos viendo cosas que nos hielan la sangre. Y veremos más.

O Sánchez o España.

Hasta hace poco decía que todo esto lo hacía por la puerta de atrás: ahora ya sabemos que lo hace descaradamente y que utilizará miles de millones de euros para comprar silencios, como saca a pasear cadáveres del pasado para distraer la atención. Y esta es otra de sus mañas recurrentes: hablar de lo que no pasa para tapar lo que pasa y lo que están haciendo.

Hay demasiados españoles, que, como les pasó antes a otros muchos en Hispanoamérica, no quieren ver lo que está delante.

¿Y qué tenemos delante?: lo que muchos no quieren ver, hasta que quizá sea demasiado tarde.

O nos hacemos los ciegos, o estamos tontos.

Lo hizo primero pactando con todos con los que juró y perjuró no pactar. Elevó a los antisistema a ministros; convirtió al brazo político de ETA en directores de la política



española y entregó las instituciones, nuestro Estado de Derecho y el futuro de ambos a quienes lideraron una sedición.

“No es no y nunca es nunca” fueron sus palabras exactas cuando se comprometió ante los españoles a no pactar con Esquerra, Bildu o Podemos. También estas otras: “Con Bildu no vamos a pactar. Se lo repito. Con Bildu no vamos a pactar. Si quieres –le dijo Sánchez al periodista- lo digo 5 o 20 veces más”.

Y no solo pactaron, sino que, además, entre acercamientos de presos y otras cesiones, entregaron las competencias de tráfico de la Guardia Civil a Navarra por exigencia del partido de Otegi, sabiendo que eso significaba la expulsión de facto del cuerpo.

Ahora sabemos que hubiera dado igual, 5 que 20 que mil veces. Esto no hubiera cambiado. En todas hubiera mentido. Al igual que miente ahora cuando afirma que no habrá referéndum de autodeterminación en Cataluña.

Sánchez ha ejecutado el mayor proceso de deformación institucional que hemos vivido hasta ahora en democracia.

Y hemos de reconocer que le ha puesto empeño:

Ha reformado el delito de malversación, no para proteger a los contribuyentes de la corrupción, sino para proteger a los corruptos.

Hace unos días, ya conocimos la primera petición de revisión de un caso de corrupción, el caso Acuamed, que afecta a destacados dirigentes del PSOE en Valencia y que está relacionada con otra trama de corrupción que hemos conocido recientemente, el caso Azud, que presenta indicios de financiación ilegal de los socialistas valencianos, según relató al juez el propio tesorero socialista.

Y, para rematar, han conseguido para el señor Griñán un trato humano negados a otros.

La humillación es norma para los adversarios de Sánchez. Ya no hay justicia, sino arbitrariedad.



Ha eliminado de facto el delito de sedición de nuestro ordenamiento, amnistiando por la vía de los hechos a quienes fueron condenados.

Y ahora sabemos lo que esto significa: una invitación a un nuevo referéndum ilegal, pero esta vez sin consecuencias y con la colaboración del presidente si, llegado el caso, su sillón en La Moncloa dependiera de ello.

Ha fijado su ambición también, y, sobre todo, en el Poder Judicial, acosando a sus instituciones hasta límites que ni los de Podemos hubieran soñado jamás.

Hoy España es un país con unas garantías constitucionales mucho más débiles que hace cuatro años.

Es inédito en nuestra Historia democrática, que tanto la presidencia como la vicepresidencia del Tribunal Constitucional tengan la misma sensibilidad política.

Tampoco el poder Legislativo, Congreso y Senado, se salva de este asalto. En poco más de cuatro años, el presidente del Gobierno ha impuesto medidas y cambios esenciales en nuestro ordenamiento jurídico por la vía unilateral del Real Decreto.

Más de 130 Reales Decretos. O lo que es lo mismo: el presidente del Gobierno ha amordazado y maniatado al Congreso de los Diputados, sustituyendo la soberanía nacional por su capricho personal.

Y todo esto, señoras y señores, tiene un nombre: autoritario.

También, torpe: solo la ineptitud y la necedad pueden explicar que aún hoy siga en vigor la nefasta Ley del Solo sí es sí, de la que se han beneficiado agresores, violadores y pederastas.

Casi 200 años de cárcel se han rebajado ya al amparo de esta barbaridad legislativa de la que ya alertó el Consejo General del Poder Judicial y el Consejo de Estado.

Pero su secretaria de Estado se ríe, en una imagen indigna de una democracia europea avanzada.

Y no es la primera vez que sucede. No es la primera vez que el Gobierno perpetra chapuzas legislativas. Baste recordar que este Gobierno con su presidente a la cabeza,





impuso a todos los españoles dos estados de alarma que han sido declarados inconstitucionales.

Insisto: Todo lo que Sánchez hace forma parte de un plan.

El mismo Tribunal Constitucional que declaró ilegales los dos estados de alarma es el que ahora está ocupado por magistrados que hasta antes de ayer eran ministros.

Este es el modus operandi del presidente del Gobierno.

Controlándolo todo, o destruyéndolo todo para conseguir su proyecto: la transformación radical de nuestro modelo constitucional y de convivencia.

Les pondré otro ejemplo, más grave de lo que parece:

El Gobierno ha aprobado una nueva Ley de Universidades. En dicha legislación, además de abrir las puertas a que profesores de poca talla como Pablo Iglesias puedan alcanzar los rectorados, se prohíbe a los Colegios Mayores diferenciados su adscripción a una universidad pública.

Porque sí. Porque les da la gana. Un paso más en la asfixia de la libre iniciativa educativa -que es otro derecho constitucional-, de la autonomía universitaria, y de la libertad de elección de los alumnos y sus familias.

Eso sí: quieren permitir a los claustros universitarios hacer pronunciamientos ideológicos. Es decir: dejar a la ultraizquierda el control de la universidad.

Tampoco se libran de este afán autocrático la seguridad ciudadana ni la función pública. Ahí está la nueva Ley de Seguridad Ciudadana, hecha para desproteger a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado frente a delincuentes y gente que solo tiene por objeto quebrar el orden en nuestras calles.

O el desguace de la función pública, donde pretenden dejar de garantizar los funcionarios mejor preparados para sustituirlos por los más afines.

Y si hicieran falta más ejemplos de cómo el presidente vive obsesionado con controlar la opinión pública, esperen al próximo barómetro del CIS y concluirán lo mismo que yo: el sueldo de Tezanos es inexplicable.



Por el momento, ya sabemos que la nueva dirección de Radio Televisión Española gasta cientos de millones de euros en contratos para salvar a medios de comunicación o comunicadores afines, con muy escaso éxito de audiencia, incluso indignando a sus propios sindicatos, lo nunca visto.

O pueden preguntarle al expresidente del Instituto Nacional de Estadística, cuando anunció su dimisión antes de que el Gobierno lo cesara por defender la autonomía del INE y no revisar el PIB según el capricho de la ministra de Economía, Nadia Calviño.

O a la ex directora del CNI, cesada también por presiones del secesionismo catalán.

O al coronel de la Guardia Civil, Diego Pérez de los Cobos, cesado por no seguirle el juego al ministro del Interior, Grande Marlaska.

La consigna es evidente, señores: o se pliegan a la voluntad del presidente del Gobierno o serán destituidos.

Para que todo el mundo lo tuviera claro, expulsó del partido a Joaquín Leguina. Con Sánchez, pocas bromas. No toma prisioneros, aviso a los candidatos de 2023 que levanten la voz.

Y los siguientes serán ustedes, los medios de comunicación.

Pero no podrán decir que no les avisaron. Les cito las palabras de la portavoz del Gobierno, Isabel Rodríguez: "Igual que tenemos un espacio para el tiempo (...) ante la necesidad de que la ciudadanía acceda con veracidad, tendríamos que reservar un espacio de información pública en cada informativo".

Recalco estas palabras: "que la ciudadanía acceda con veracidad". Porque, para Pedro Sánchez, la veracidad es él.

Ahora, en 2023, el presidente ha abierto la chequera. Chequera llena de billetes por el exceso de recaudación, al tiempo que dispara la deuda pública. Y les auguro que veremos cosas que hasta ahora nos parecían imposibles, pero sobre las que ya tendríamos que estar alertados.



El Bono Cultural Joven, por ejemplo, que no es más que un intento desesperado por comprar a los votantes jóvenes que se incorporan a los censos, se presentó como una medida estrella y no ha pasado de estrellada.

Solo un tercio de los posibles beneficiados se apuntó a poco tiempo de acabarse el pazo. Y en lugares como Palencia, solo un joven lo ha solicitado para comprarse videojuegos.

Pura cosmética para tomarle el pelo a los españoles. En el lenguaje castizo de Madrid, a esto se le llama engañabobos.

Pero Sánchez no duda en endeudarse con préstamos de la UE para rescatar a la compañía venezolana Plus Ultra con 53 millones de euros públicos, mientras tienen que maquillar los horarios del tren de Extremadura para que, y cito textualmente al presidente de Renfe y ex secretario de Estado de Zapatero, “la gente no tenga la sensación de que va tarde”. O, lo que es lo mismo, intentar ocultar su rotundo fracaso.

Maduro y Plus Ultra, sí; los extremeños, no.

Es tal la velocidad con la que asaltan instituciones, y pergeñan decretos que hay que hacer este ejercicio recordatorio para saber dónde estamos y hacia dónde nos dirige Sánchez porque, como les decía al principio, todo obedece a un plan, el de la carcoma del orden constitucional y de la autonomía económica de empresas y familias, de anular todo lo que defiende a los ciudadanos de los abusos y la arbitrariedad de su poder.

Desde el punto de vista económico, como bien saben, los resultados de estas agresiones a la ley ya los estamos viendo: España ha perdido 18.000 millones de inversión extranjera entre los 3 primeros trimestres de 2022 y los de 2018, año en el que Sánchez fue investido.

El mal llamado “impuesto de solidaridad” es el mejor ejemplo de ello. Se trata de un tributo claramente inconstitucional, tanto en la forma de tramitarlo como en el contenido, que atenta contra las comunidades más abiertas a la inversión.

Como vengo denunciando, el nuevo impuesto de Patrimonio, que es lo que procede, lo llaman “Impuesto de Solidaridad de las Grandes Fortunas”. Una denominación muy



similar al “Aporte Solidario y Extraordinario para ayudar a morigerar los efectos de la Pandemia” que aprobaron en Argentina a finales de 2020.

Un impuesto que recaudó menos del 60% de lo esperado y desató una ola de amparos y reclamos judiciales que acabó con una declaración de inconstitucionalidad realizar por un juez federal de primera instancia de la provincia de Corrientes.

Pero esto no ha ocurrido solamente en Argentina. Si en Europa prácticamente no existe este impuesto es porque genera situaciones como las que hemos visto en Francia, donde lo han eliminado tras comprobar que 200.000 millones de patrimonio habían salido del país, con una pérdida de recaudación de 7.000 millones de euros.

En definitiva: la inseguridad jurídica, la arbitrariedad hecha norma, el gobierno a golpe de decreto, la actitud autoritaria y la política de acoso y derribo de la herencia de la Transición, del Estado de derecho, de la prosperidad, de las garantías de la unidad de la Nación española, y de la Constitución misma tienen un precio, y lo está pagando la clase media, y muy especialmente, la madrileña.

El principal problema de Madrid se llama Pedro Sánchez; porque él y sus socios son el verdadero problema de España en este momento, la mayor amenaza para su estabilidad.

Por eso, Frente a estas políticas, hay que confrontar con otras políticas que sean, sobre todo, leales a España y eficaces.

En la Comunidad de Madrid estamos demostrando eficacia en el ámbito económico y, a este respecto, en este foro de Expansión, quiero hacer un anuncio de interés: vamos a apostar como nunca por la digitalización.

Prometí en mi primera campaña electoral que esta Comunidad se convertiría en la mejor digitalizada del sur de Europa. Y ya lo somos.

Ahora, iremos a más: seremos en cinco años la zona de Europa con mayor tráfico de datos: el centro europeo.



Dentro de poco, Madrid podrá enviar a Nueva York mediante cable óptico 50.000 películas en 1 segundo.

Para conseguir estas avanzadas tecnologías, Madrid necesita una energía equivalente a 100 megavatios, que los tiene. Con respecto al resto de España, somos muy competitivos, pues la segunda región en capacidad de megavatios es Cataluña, con menos de 30.

Ahora bien: París o Ámsterdam tienen ya una capacidad de 600 megavatios. Y Londres, casi 1.000.

Para superar a París y Ámsterdam, cosa que podríamos hacer en 3 años, necesitamos dos cosas:

Primero, organizar nuestra burocracia entre las administraciones regional y locales. Eso ya está en vías de solución porque hoy mismo se presenta la Oficina de Impulso a los Centros de Datos que dirigirá la coordinación de proyectos.

El segundo problema es más complicado porque dependemos del gobierno de Sánchez y de Red Eléctrica. Si ellos no ayudan, no superaremos a París y a Ámsterdam.

Pero confío en la victoria de Alberto Núñez Feijóo para solucionar este segundo escollo.

Ahora bien, lo que sí puedo anunciar es que la Comunidad de Madrid va a apostar por un sector que, económicamente, será el más importante de todos, este de la digitalización.

Los inversores extranjeros se interesan por dos proyectos. El primero, Madrid Nuevo Norte; el segundo, por la digitalización. Y no descarto que se cambien las prioridades en los próximos años.

Termino, señoras y señores:

Solo las urnas, el voto libre y responsable de los españoles, pueden salvarnos de que Sánchez y sus coaligados de ultraizquierda, independentistas y herederos de Eta culminen su plan.



Insisto: no están improvisando. Les dicen a muchos lo que quieren oír, para llevarnos a todos a donde no quisiéramos ir.

La minoría que votó a Sánchez no lo votó para nada de esto. Ha mentido a sus votantes y está traicionando a España.

Si no queremos verlo, no será porque no lo estén mostrando descaradamente.

Si los españoles no despiertan y caen en la cuenta de lo que están haciéndole, varias generaciones pagarán el precio de esa ceguera.

Si la sociedad española no lo ve lo que está pasando es que somos tontos.

Muchas gracias.